



Sergio Hernández (izquierda) y Antonio Martín muestran las fotos de Delgado y Granado, ejecutados por los atentados cometidos por aquéllos.

DANIEL MORDZINSKI

LOS RESPONSABLES DEL ATENTADO POR EL QUE FRANCO EJECUTÓ A DOS ANARQUISTAS INOCENTES CONFIESAN AHORA LOS HECHOS

Toda la verdad, 41 años después

JOAQUÍN PRIETO

Esta historia nos devuelve a un tiempo de terror. El 17 de agosto de 1963, cuando el general Franco gozaba de la plenitud del poder, los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron ejecutados en la cárcel madrileña de Carabanchel con el instrumento medieval del garrote vil. Ambos habían sido condenados en un consejo de guerra sumarísimo, bajo la imputación de haber colocado bombas en la Dirección General de Seguridad y en la sede de los sindicatos verticales. Y sin embargo, ninguno de los dos tuvo nada que ver con tales hechos.

Los verdaderos autores de tales atentados fueron Sergio Hernández, que tiene ahora 61 años, y Antonio Martín, de 65. Ambos son categóricos: "Nosotros hicimos las acciones por las que ejecutaron a Granado y Delgado". Un documental rodado en 1996, emitido por la cadena Arte y después por TVE, recogió por primera vez declaraciones suyas. No tuvo mucho eco, pero facilitó a las familias de los ejecutados la tarea de reunirse en torno al objetivo de rehabilitar la memoria de Granado y Delgado.

El Constitucional ha decidido ahora que las familias tienen derecho a que el Supremo practique las pruebas pedidas, en contra de la decisión tomada en 1999 por su Sala Militar, que no admitió la revisión de la sentencia. El lunes pasado, Hernández y Martín entregaron una carta en la Embajada de España en París dirigida al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, pidiendo testificar en el recurso de revisión. Los dos continúan viviendo en Francia, así como el responsable político de aquellos atentados, Octavio Alberola.

En una extensa conversación con EL PAÍS, los tres cuentan con detalle la gestación y desarrollo de aquella acción que costó la vida a otros dos compañeros anarquistas (Granado y Delgado), ejecutados a garrote vil por el régimen franquista y de cuya inocencia ellos mismos dan fe.

¿Por qué se muestran tan seguros de que Granado y Delgado eran ajenos a los atentados por los que fueron condenados? El principal testigo vivo para responder a esa pregunta es Octavio Alberola, de 75 años, que envió a Madrid tanto a Hernández y Martín, por un lado, como a Granado y después a Delgado para misiones diferentes. El antiguo responsable de los grupos de militantes anarquistas es el único superviviente del organismo llamado Defensa Interior, el comité libertario que dirigía en secreto la lucha armada contra Franco y del que formaron parte Cipriano

Mera, que fue general del ejército de la República, y Juan García Oliver, ex ministro de Justicia en uno de los Gobiernos durante la Guerra Civil.

"Se había pensado en un atentado contra Franco cuando acudía al palacio de Oriente para recibir las credenciales de los nuevos embajadores, y había dos grupos para hacerlo", explica Alberola. "Francisco Granado salió de Alès [sur de Francia] por encargo mío, y fue a Madrid en un coche donde llevaba material para la explosión a distancia, una pistola y una metralleta. También tenía un contacto para recuperar en Madrid una maleta con 25 kilos de dinamita plástica".

La misión de Granado en Madrid era "recuperar la maleta, entregar todo el material al otro grupo y volverse a Francia. El problema era que pasaba el tiempo sin que hubiera noticias de la llegada de nuevos embajadores. El 25 de julio nos confir-

Sergio Hernández: "Nuestro objetivo no era que hubiera 20 o 30 heridos como hubo. Aquello fue una fatalidad del destino, una casualidad desgraciada"

¿Por qué estas personas lo cuentan todo 41 años después? Hernández: "Granado y Delgado murieron por algo en lo que no tenían nada que ver... quiero que esto quede claro"



Octavio Alberola (izquierda), con Martín y Hernández, en el cementerio parisense Père Lachaise esta semana. DANIEL MORDZINSKI

maron que Franco había salido de vacaciones, y yo le encargué a Delgado que avisara al otro grupo de que esa acción no iba a hacerse y que conectara con Granado, para decirle que dejara el material en lugar seguro y se volvieran los dos rápidamente". Siguiendo sus instrucciones, Delgado consiguió encontrar a uno de los compañeros que buscaba, Robert Ariño, el domingo 28 de julio, y éste salió inmediatamente para Francia.

En cambio, Delgado no pudo conectar con Granado. El contacto se hacía a través de una ferretería que, como era domingo, estaba cerrada. Por eso tuvo que quedarse. Un retraso que resultó fatal para sus vidas: al día siguiente se produjeron los bombazos en la Dirección General de Seguridad (situada en la Puerta del Sol, en el edificio que ocupa la presidencia del gobierno autonómico) y en la sede de los sindicatos verticales (en el paseo del Prado, edificio que ocupa el Ministerio de Sanidad), llevados a cabo por Antonio Martín y Sergio Hernández, que actuaron sin tener ni idea de los apuros en que estaban Granado y Delgado. La policía sólo tardó dos días en detener a éstos, y los dos sólo vivieron 17 días más hasta que fueron entregados a los verdugos.

"Yo había llegado a Madrid el 24 de julio, en tren y con documentación auténtica", cuenta Antonio Martín. Había dejado su trabajo en París (es ingeniero electrónico) con la idea de constituir un grupo permanente en España. Ajeno a la idea de un peligro inminente, pidió el documento nacional de identidad en una comisaría: "Yo di un domicilio para tramitar el carné, y ni lo miraron. Si no estabas fichado era relativamente fácil".

Conciencia del riesgo

Por su parte, Sergio Hernández había llegado en coche y con documentación falsa. Él tenía más conciencia del riesgo, porque había estado otras veces en Madrid "vigilando cosas". Venía con un encargo y cierto material explosivo en su poder, que no sabía dónde guardar. Para eso tomó contacto con Antonio Martín, que contaba con dos pisos en la capital de España. "Unos compañeros alsacianos me prestaron uno en la plaza de Castilla y otro en San Blas. Éste estaba muy bien, porque era un barrio de casas populares a las que venían inmigrantes de todas partes y a nadie le llamaba la atención alguien nuevo", explica.

Antonio Martín sigue contando: "Sergio me dio un bolso con detonadores y dinamita plástica. Yo, sin saber que el atentado contra Franco había sido anulado, pensé que el material que teníamos en el piso no podía estar ahí días y días. Le dije a Sergio: oye, lo que haya que hacer, que sea cuanto antes. El error fue mío, al querer acelerar las cosas", reconoce Martín. Al otro compañero, Sergio Hernández, le habían dicho que el artefacto había que ponerlo en la Dirección General de Seguridad en la segunda semana de agosto, pero ellos decidieron adelantarlo al lunes 29 de julio temiendo la inestabilidad del material. "El plástico es muy sensible a los cambios de temperatura y a otras circunstancias".

"Sergio y yo nos dimos cita en el metro Sevilla", explica Martín. "Yo caminé por la calle de Alcalá hacia la Puerta del Sol

y me coloqué en la esquina con la del Carmen, enfrente de la Dirección General de Seguridad. Sergio, que llevaba el paquete con el plástico y el detonador, venía por la carrera de San Jerónimo, buscando un bar donde meterse para hacer la unión del detonador con el explosivo. Lo hizo y yo le vi acercarse. Él entró en la Dirección General de Seguridad, con el detonador ya unido al plástico”.

La casa de la represión

Introducirse allí no era difícil: la oficina de pasaportes permanecía abierta al público. Se había elegido el objetivo de la Dirección General de Seguridad porque era “la casa de la represión, donde se había torturado a cientos de antifranquistas”, argumenta Hernández. “La policía franquista había matado allí mismo al padre de un amigo mío de la infancia, Tomás Centeno [dirigente del PSOE en la clandestinidad]. Lo mataron a palos, oiga usted”, recuerda Martín. El artefacto explosivo quedó en la bolsa, debajo de un banco. Sergio Hernández salió de la Dirección General de Seguridad y vio a su compañero: se retiraron por la calle del Carmen, salieron a Montera y se separaron.

Habían programado la explosión para cuatro horas más tarde, pero ocurrió a la media hora. La oficina de pasaportes estaba todavía abierta y hubo una veintena de heridos, la mayoría leves. Ellos no se dieron cuenta. “En esas circunstancias, uno va pendiente de irse cuanto antes”, reconoce uno de ellos. Además les quedaba tarea: a las ocho de la tarde tenían previsto colocar la segunda bomba, en el edificio de los sindicatos verticales. “Yo había llevado material sólo para un artefacto. Así que nos separamos, me fui al piso de San Blas, cogí el material para el segundo y volví”, detalla Antonio Martín. “Me había citado con Sergio en la calle del General Mola [actual Príncipe de Vergara]. Bajamos por Alfonso XII, la calle que tiene el parque del Retiro y nace en la Puerta de Alcalá; salimos a Neptuno, continuamos hasta Sindicatos y pusimos el artefacto en una ventana. El detonador funcionó bien y el paquete estalló a la hora prevista, las doce de la noche; no así el de la Dirección General de Seguridad, que estalló mucho antes de lo programado”.

“Si el mecanismo no hubiera fallado habría explotado a las nueve de la noche, con la oficina cerrada y vacía”, afirma Martín. Sergio Hernández lo corrobora: “Nuestro objetivo no era que hubiera heridos, como hubo, porque eso lo que hizo fue desprestigiarnos ante la opinión pública. Hay que decir las cosas como son. Aquello fue una fatalidad del destino, una casualidad desgraciada”. Insiste en ponerlo de relieve “para que se sepan las mentiras del Gobierno de Franco diciendo que éramos terroristas, que si habían tocado a veinte o treinta millones por la bomba en Gobernación; fue una campaña crapulosa”. Asegura que los libertarios nunca han actuado por lucro, sino por ideología.

Cuando escuchó en la radio que había habido heridos, Hernández primero se sintió incrédulo: “¿Pero qué es lo que he hecho?, pensé”. Estaba en peligro: tomó el coche y salió rápidamente hacia la frontera con Francia. “Llevaba una pistola del 9 corto, y me había hecho la cuenta de que, antes de que me



Algunas de las noticias que los diarios *Ya*, *Informaciones* y *Pueblo* dedicaron a las bombas anarquistas. MANUEL ESCALERA

LA VIUDA DE UNO DE LOS EJECUTADOS PIDE QUE SE HAGA JUSTICIA

“Quiero su rehabilitación”

SOLEDAD ALCAIDE

Una noche del verano de 1963, Pilar Vaqueriza encendió la radio como era su costumbre. Así se enteró de que su marido, Francisco Granados, había sido detenido en España, acusado de haber cometido dos atentados. Su sorpresa fue enorme, porque pensaba que él había dejado su casa de Alès, en el sur de Francia, donde vivía con ella y sus tres hijos (la mayor, de cinco años) porque estaba enfermo e iba a tratarse a España.

“Nunca me dijo nada de lo que hacía. Sabía que hablaba con personas que venían a verlo a casa, pero él me decía: ‘Vete a dar una vuelta con los niños’, y yo me iba”, relató esta semana Vaqueriza en la casa de sus tíos en Madrid, donde se encuentra de vacaciones. Precisamente en la de su tío Gregorio Coronas, quien tuvo que cumplir 15 meses y cinco días en prisión por el mismo proceso que su marido. “Por haber ido a verle a la cárcel me llevaron por delante. Dijeron que yo era cómplice”, cuenta éste.

Cuando Pilar Vaqueriza se enteró de la ejecución de su marido, apenas dos semanas más tarde, perdió la cabeza. “Volví a casa y estaba como loca, llorando y desesperada. En ese momento yo no hablaba francés y tenía tres niños a mi cargo. La pequeña, de 20 meses... Me ingresaron cuatro veces en hospitales con depresiones y mientras los vecinos me guardaban a los chicos”, explica. Desde entonces, cuenta, sufrió mucho.

Sin dinero ni trabajo, su padre consiguió que le emitieran un certificado de defunción de su esposo para solicitar la pensión de orfandad en Francia para sus hijos. “En él



Pilar Vaqueriza muestra un libro con imágenes de su marido. LUIS MAGÁN

decían que mi marido había muerto de neumonía”, agrega. “Con eso he vivido desde entonces”. Y con la ayuda social que le proporcionó el Gobierno francés. Porque desde la ejecución de Granados, la familia no pudo regresar a España hasta la muerte de Franco. “Venía de vez en cuando a ver a mi familia, pero durante ocho años no pude”, explica. En ese tiempo consiguió el estatus de refugiada política: “Así nadie me podía hacer nada”, añade. Pero tuvieron que abandonar el pueblo y mudarse a Quillon, cerca de Perpignan. “En los pueblos, todo se sabe, y yo no quería que mis hijos crecieran así. Allí estoy

desde hace 40 años”, dice. Con el fin del régimen franquista, solicitó la nacionalidad francesa, para poder quedarse en el país donde nacieron dos de sus tres hijos y ahora también sus nietos.

Pilar Vaqueriza sabe que el proceso judicial deberá volver a empezar. “Siempre que sea necesario volveré a empezar. Pero pido justicia y la rehabilitación para las víctimas del franquismo y para mi marido. Porque él no hizo lo que dicen que hizo”, asegura. Ella espera recibir algún día una pensión como viuda de una víctima del franquismo u otra compensación. “Yo nunca he recibido nada”, se lamenta.

cogieran, me metía un balazo en la cabeza”. Él llegó a París el martes 30 de julio. Con menos suerte, Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron detenidos al día siguiente en Madrid y les acusaron de las bombas en la Dirección General de Seguridad y en los Sindicatos.

Sergio Hernández afirma que propuso convocar a la prensa internacional en París para presentarse como autor de aque-

llas acciones, “intentando evitar, en lo posible, que condenaran a muerte a los compañeros”. Octavio Alberola estuvo en la reunión donde esa propuesta se rechazó. “Se pensó que no iba a servir de nada; primero, porque Franco iba a ejecutar de todos modos a los que tenía presos, y además porque Cipriano Mera dijo que los libertarios nunca habíamos denunciado a ningún compañero”.

Antonio Martín: “Hay un problema ético. Nosotros no éramos terroristas, sino resistentes a una dictadura, y necesitamos que se la condene políticamente”

Hernández corrobora que el teniente coronel (que llegó a mandar una división) Mera —a quien atribuye “una gran experiencia revolucionaria”— le disuadió de autoinculparse. “Me convenció de que hacerlo no iba a salvar a nuestros compañeros, Granado y Delgado, a los que la dictadura iba a matar sin la menor duda; cuatro meses antes habían fusilado a Julián Grimau [dirigente comunista], por más campañas que se intentaron para salvarle. Y me advertió de que lo que yo dijera en París podía poner en peligro a otros. El propio Antonio, con el que había estado en Madrid, se había quedado allí”.

La decisión de los responsables libertarios fue informar a la prensa de que las personas que habían hecho la acción de la Dirección General de Seguridad estaban a salvo, y que tanto Delgado como Granado no tenían nada que ver con lo que se les acusaba. “Pero al régimen franquista le dio igual”, recuerda Alberola. Ignorante de todo ello, Antonio Martín se quedó en España hasta finales de agosto: cada vez más mosqueado, suspendió sus planes y se volvió a Francia. Martín es de los convencidos de que hubo un chivatazo: “No sé de dónde vino, pero lo creo así”.

¿Por qué estas personas lo cuentan todo 41 años después? Cada uno tiene motivaciones diferentes. Para Sergio Hernández, se trata de descargar la conciencia: “Me he pasado casi toda una vida dando vueltas a la cabeza. Las personas heridas en la Dirección General de Seguridad; los compañeros Granado y Delgado, muertos por algo en lo que no tenían nada que ver..., quiero que esto quede bien claro”.

Sufrimientos

Antonio Martín lo ve de otro modo: “Ha habido muchos asesinados por el franquismo, no sólo Granado y Delgado, y esto plantea un problema de justicia. Después hay un problema ético: los sufrimientos que todo eso han supuesto. Nosotros no éramos terroristas, sino resistentes a una dictadura, y necesitamos que se condene políticamente al sistema”. Y aborda otro tema delicado, con precaución: “Los encarcelamientos, las muertes de tantas personas, simplemente por defender las libertades ordinarias, ¿esto no merece que la sociedad se interese por los supervivientes y por las familias de los que han muerto?”.

Octavio Alberola lo enfoca claramente por el lado político. “La vicepresidenta del Gobierno [María Teresa Fernández de la Vega], en tanto que presidenta de la Comisión de la Memoria, debe saber que el grupo pro revisión del proceso a Granado y Delgado y los familiares de los compañeros ejecutados respaldan al objetivo de esa comisión, que es el de presentar un proyecto de ley para anular las sentencias de la dictadura franquista”. ¿Y si esa iniciativa no llegara a término? “Seguiríamos intentando la revisión judicial y transformarla en un proceso público de los crímenes franquistas”, dice. Un proceso en el que imagina que se pediría la presencia de responsables de la época franquista, y cita el nombre de Manuel Fraga; lo mismo que de personalidades que sufrieron la represión franquista. Y al preguntarle en quién está pensando, menciona a Jordi Pujol.